



Comisión de Comunicación de Entrepueblos

Manifestación contra la privatización del agua en San Salvador

Activistas denuncian el retroceso democrático y la criminalización de las organizaciones en su país

Defensores y defensoras de derechos humanos de El Salvador visitaron en octubre Madrid, Barcelona y Bruselas para explicar a las entidades sociales e instituciones políticas la situación que atraviesa este país, con un grave retroceso democrático y una criminalización de las organizaciones sociales, especialmente desde la aplicación de régimen de excepción del gobierno estatal. Tuvimos la oportunidad de charlar con cinco de ellas, pero, por motivos de seguridad, omitimos sus nombres.

“LA ECONOMÍA CAMPESINA ESTÁ SUFRIENDO UN ABANDONO Y SE PRIORIZA A PRODUCTORES DEL FUERA DEL PAÍS”

El primero al que entrevistamos trabaja la tierra desde los 7 años y, ahora, defiende un modelo de agroindustria cooperativo y ecológico que permita vivir en el territorio, sin tener que abandonar el país o renunciar a su forma de vida. Es miembro de una organización ligada a la Vía Campesina, movimiento de organizaciones de pequeños agricultores, trabajadores del campo y comunidades indígenas de todas las regiones del mundo que promueve la alimentación como derecho humano básico y la soberanía alimentaria.

Como parte activa del movimiento campesino, lamenta que los espacios de diálogo y negociación con el gobierno hayan desaparecido y muchos programas en marcha “ya no tengan recursos o se hayan eliminado de tajo”. **Como ejemplo el abandono de la economía campesina para favorecer a grandes grupos de poder o macroproyectos turísticos en zonas rurales, indica que se han incrementado las importaciones agroalimentarias en detrimento de la producción local de granos básicos y otros alimentos.** “Muchos ganaderos abandonaron su actividad en 2020 y 2021 porque no tuvieron ningún apoyo, ya que se priorizó comprar todo lo necesario para la pandemia fuera del país. Esta decisión no solo afectó a la economía de los sectores productivos sino que supuso una pérdida de divisas que se han ido al exterior y no circulan en la economía local”, concluye.



“CON EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN, SE HA LIMITADO TODAVÍA MÁS EL ACCESO A LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN OFICIAL”

Otra de las defensoras forma parte de la Plataforma por la Seguridad Ciudadana (PSC) y la Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD) y maneja indicadores alarmantes sobre el retroceso de la libertad de expresión y la criminalización de activistas. “Se ha convertido en una práctica sistemática desde el Estado penalizar o criminalizar la labor de las personas defensoras. Existen al menos 246 casos documentados, de los que más del 50% son agresiones contra mujeres, defensoras o periodistas. Más del 60% de estos ataques los comete algún agente estatal”.

Experta en seguridad ciudadana, lamenta que se haya incrementado en más de un 200% el presupuesto en militarización del país desde la llegada del presidente al poder, así como la asunción de “unos valores militares muy marcados que están muy presentes en unas políticas populistas”. Mientras, se cierran radios comunitarias o se asfixia el trabajo de muchas organizaciones.

También señala las consecuencias que está teniendo el régimen de excepción (impuesto en marzo de 2022) en el derecho al acceso a la información pública: “Las instituciones han reservado los datos oficiales sobre seguridad o han aumentado los límites para acceder a dicha información, algo que ya era una tendencia en este gobierno pero que es todavía más profundo en el marco de régimen de excepción”, destaca. **Desde las plataformas en las que participa, han observado casos de malos tratos, torturas, y más de 80 muertes en centros penitenciarios, sin que se les haya facilitado información.** “Muchas de estas personas han sido enterradas en fosas comunes y las familias ni siquiera sabían que habían muerto, han sido las empresas funerarias las que les han informado de que están muertas o los propios centros de salud de que están graves”.

Alerta también de la situación límite en el sistema carcelario, con un porcentaje de hacinamiento de más de un 300% y una pérdida de garantías judiciales.

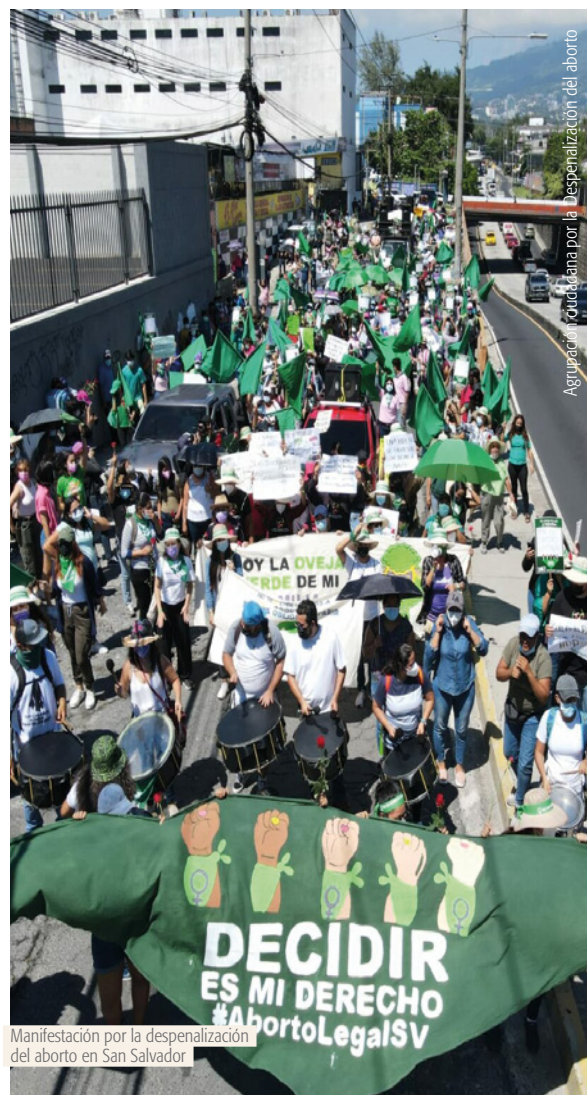
“EL 70% DE LOS JÓVENES CONSIDERA QUE MIGRAR ES LA MEJOR SOLUCIÓN”

Seguidamente hablamos con un representante de la Plataforma Global El Salvador, espacio que apoya el activismo de la juventud en El Salvador y Centroamérica. Su entidad promueve “el protagonismo juvenil en el cambio social, político y económico”.

Defiende la gran diversidad de su país que, sin embargo, tiene un problema en común: “Somos mujeres, hombres, personas LGTBIQ+, jóvenes con discapacidad... perseguidas, criminalizadas y estigmatizadas por el estado salvadoreño. No nos sentimos seguros ni seguras porque no hay políticas públicas que respalden nuestros derechos”.

Con una Ley General de la Juventud aprobada en 2011, tras 10 años de luchas de las asociaciones juveniles, afirma que ésta no ha tenido continuidad en los últimos años, en los que, en cambio, sí ha aumentado la violencia social y estatal contra la juventud: “Debido al régimen de excepción se ha privado de libertad a más de 50.000 personas, acusadas de pertenecer a pandillas y, de ellas, el 58% son de 15 a 30 años”. Explica también que en 2021 se registraron más de 1.200 muertes violentas, el 45% de ellas entre jóvenes.

Además, 452.000 personas no tienen acceso a educación o trabajo (que se agrava en el caso de las mujeres). “El 70% de la juventud considera que migrar es la mejor solución. Con la pandemia y con el régimen de excepción, se está invirtiendo más en militares o en abrir cárceles que en crear escuelas o mejorar el sistema educativo salvadoreño”, concluye.



Manifestación por la despenalización del aborto en San Salvador

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto





“A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SE ESTÁ VENDIENDO QUE LAS MUJERES SEAN ABNEGADAS Y NO TRABAJEN POR SUS DERECHOS NI SU DESARROLLO”

La siguiente que nos atiende es activista de una organización feminista que lucha por la autonomía del cuerpo de las mujeres, su independencia económica, la participación política femenina y la erradicación de violencia machista.

Denuncia que, desde 2019, se experimenta un retroceso en los derechos de las mujeres en su país, que había conseguido ir estableciendo instituciones para hacer políticas transversales de género, como el Instituto de la Mujer, leyes de igualdad y de erradicación de las violencias, o mecanismos para medir el avance y desarrollo de la igualdad, como las Unidades Municipales de la Mujer.

Otra de las alertas feministas es el retroceso en derechos sexuales y reproductivos. “Tenemos una propuesta de ley para la despenalización del aborto pero actualmente está archivada. Luchamos para que el sistema educativo asuma con responsabilidad una política integrada de la sexualidad con jóvenes y adolescentes”, explica la defensora feminista, que puntualiza que se está criminalizando a entidades como la suya acusándolas de promover el aborto.

La falta de indicadores de género y de encuestas de violencia y usos del tiempo, así como el incumplimiento por parte del Estado de convenios como el 189 de la OIT relativo a las trabajadoras de hogar remuneradas, son otras de sus inquietudes, al tiempo que no quiere olvidar los problemas específicos de las mujeres que viven en zonas rurales, “donde se ha incrementado la pobreza, no hay fuentes de empleo, no tienen tierras propias y hay poco acceso a la educación”.

SE OBSTACULIZAN LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES QUE LLEVAMOS 30 AÑOS TRABAJANDO EN EL TERRENO Y CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Finalmente hablamos con una defensora de derechos humanos en temas de agua y medio ambiente. Ha acompañado casos emblemáticos de injusticia hídrica como un conflicto con la empresa Coca-Cola y otros casos de Defensores Comunitarios de agua. También contribuyó al proceso de construcción de la Ley General de Aguas y la Ley del Subsector de Agua Potable, aunque la ley aprobada finalmente por el gobierno, tiene en muchos aspectos, un enfoque privatizador.

Acusa al gobierno salvadoreño de ser obediente a los grupos de poder, sobre todo de los sectores de comercio e industria, a costa de expoliar los bienes naturales del país. “Se están instalando megaproyectos en las zonas rurales dejando a la población sin sus bienes de vida y de subsistencia. Desde nuestra red y desde la plataforma Foro del Agua reivindicamos casos emblemáticos de conflictos socioambientales en los que vemos una lucha desigual de las comunidades para enfrentarse a las estructuras del estado y las grandes empresas”, afirma.

Denuncia que no se respetan las normativas de participación ciudadana y no se realizan las consultas que requieren los proyectos en comunidades rurales o en bienes naturales de áreas declaradas protegidas. “Las directrices de la administración son modificar o agilizar los permisos ambientales o directamente no requerir permisos. Ponemos demandas en los juzgados ambientales y no prosperan. Todos los planes hechos para proteger el medioambiente se han tirado a la borda”.

La actividad de varias organizaciones se ha visto seriamente obstaculizada bajo la narrativa del gobierno de que las ONG obstaculizan el desarrollo, defienden delincuentes y financian grupos criminales.

El gobierno las acosa amenazando con aprobar leyes que dificultarían la cooperación internacional, un escenario muy preocupante para todo el tejido socio comunitario y de justicia climática de El Salvador. “Con esta gira hacemos un llamado a la solidaridad. Más allá de los gobiernos que hemos tenido siempre ha permanecido el apoyo de los pueblos, que nos ha permitido salir adelante y estar en donde hemos llegado en la defensa de la democracia y la justicia social”, finaliza.

